

## INQUISICIÓN, POLÍTICA Y JUSTICIA EN LA SICILIA DE FELIPE II

Vittorio Sciuti Russi  
(Università di Catania)

**L**. El juramento de los soberanos de respetar el particularismo jurídico-institucional del Reino de Sicilia había impedido a Felipe II incluir en la administración isleña a ministros españoles mediante los cuales controlar desde el interior el ministerio togado y los cuadros burocráticos locales. El rey prudente y sus sucesores estuvieron obligados, por lo tanto, a utilizar «mecanismos supraconstitucionales», «a partir del papel de defensores de la religión»<sup>(1)</sup>; en la Inquisición autónoma de rito español ellos hallaron el principal instrumento de control sobre el aparato estatal, así como sobre la sociedad isleña. El Santo Oficio, impuesto en Sicilia por Fernando el Católico, se había consolidado con Carlos V entre contrastes y dificultades<sup>(2)</sup>. A mediados del siglo XVI, durante el largo reinado de Felipe II, se transformó su función política-institucional, convirtiéndose —como iremos viendo— en un instrumento específico del absolutismo y del modelo administrativo español en la isla<sup>(3)</sup>.

Los informes enviados por los inquisidores de Sicilia a Felipe II y a la Suprema insistían en la función del Santo Oficio, «causa primaria de la conservación del Reino» (Gasco, 1577), «muralla fortísima que lo defiende de la invasión de los herejes y lo mantiene bajo la obediencia de la Iglesia y de Vuestra Majestad» (Haedo, 1580)<sup>(4)</sup>. La «muralla fortísima» fue construida a través de una organización muy autoritaria en el centro y difundida capilarmente por la periferia. En lo más alto, en la capital del Reino, había «tre inquisitori et un avvocato fiscale, soggetti spagnoli, alcuni secretari, pure spagnoli, et un recettore, molti qualificatori et consultori, commissari, familiari et portieri»<sup>(5)</sup>. La plena cobertura del territorio quedaba asegurada por los comisarios, oficiales y familiares, elegidos entre «los más facultosos» y colocados en cada ciudad del Reino, incluso en los caseríos de sesenta vecinos<sup>(6)</sup>: «ce ne sono cavalieri, baroni, mercanti, artigiani, villani, et d'ogni spetie», observaba Scipione di Castro<sup>(7)</sup>. Una presencia tan numerosa y preponderante de sujetos pertenecientes a las clases económica y socialmente dominantes entre los familiares de la Inquisición de Sicilia, constituye una constante y un rasgo peculiar que no encontramos en los demás distritos inquisitoriales y de la que hay que analizar circunstancias, tiempos y razones.

Una gracia solicitada con reiteración en numerosos Parlamentos de la primera mitad del siglo XVI había reivindicado la abolición del procedimiento extraordinario *ex abrupto*, que permitía a los magistrados disponer de la encarcelación inmediata y de la tortura sobre la base de simples informaciones o denuncias que el poder discrecional de los jueces elevaba al rango de prueba semiplena. Carlos V no otorgó esta gracia, decidido a no perder un instrumento insustituible de control político-jurisdiccional frente a la feudalidad y a los grupos económicamente dominantes<sup>(8)</sup>. Fue a mediados del siglo cuando, con el fin de eludir la jurisdicción ordinaria y los riesgos del procedimiento *ex abrupto*, numerosos nobles y mercaderes entraron a formar parte, como familiares, del tribunal de la Inquisición. A través de la adquisición venal de la familiatura y de los relativos privilegios, dichos sujetos lograrían la inmensurable ventaja del fuero inquisitorial no solamente en los pleitos civiles, sino también en los juicios criminales, y ello significó la impunidad en los delitos. Alfonso Crivella en 1593 observaba cómo «tutta la nobiltà et cavalleria et persone di qualità si facevano familiari d'esso Santo Ufficio per goder di quello foro, et per non essere obligati al Viceré, né ad altro Tribunale»<sup>(9)</sup>. A la atracción por la jurisdicción privilegiada, sea en las causas civiles, sea en los procesos penales, había que añadir las demás prerrogativas inherentes al status de oficiales de la Inquisición: la licencia de armas prohibidas, las numerosas franquicias fiscales, la exención del servicio militar y de los pesados cargos municipales<sup>(10)</sup>.

Para la Inquisición siciliana, incluir entre sus cuadros a los estamentos isleños socialmente privilegiados significará asegurarse un consenso interesado, amplio y que, sobre todo, a través de estas elites intermediarias, se extenderá a las demás clases urbanas. A través de estos familiares, los inquisidores controlarán a los súbditos de las ciudades y de las tierras, sean realengas sean feudales. Un resultado éste de gran relieve político para la Inquisición de Sicilia que se reflejará de inmediato en una influencia más incisiva en la Corte madrileña. A nivel patrimonial estas adhesiones supondrán ingresos ingentes para la hacienda inquisitorial; en efecto, las ventas ilícitas de las patentes de familiar, los derechos cobrados en los contenciosos civiles y, por fin, las onerosas composiciones y transacciones abonadas por los aforados responsables de los frecuentes episodios delictivos, comportarían notables beneficios económicos para el balance inquisitorial, sumido en una profunda crisis, dado que se habían agotado los recursos procedentes de las comunidades de conversos, aniquiladas en la primera mitad del siglo.

2. Felipe II, en 1575, había incrementado el número de los oficiales y de los familiares de 800 a 1721<sup>(11)</sup>. El fuero privilegiado estaba, además, extendido a los parientes, a los comensales y a los servidores del aforado titular: de esta manera se alcanzó, según la evaluación del virrey Marco Antonio Colonna, el número de 30.000 personas entre las que el héroe de Lepanto hallaba «todos los ricos, [los] nobles y los delinquentes»<sup>(12)</sup>. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, se produjeron muy a menudo duras disputas de competencias entre el tribunal de la Gran Corte y el Santo Oficio. La iuspublicística reveló en seguida la contraposición entre los dos bloques de poder: Inquisición y nobleza por un lado, virrey y ministerio togado por el otro<sup>(13)</sup>.

En aquellos años, y en varias ocasiones, los inquisidores, mediante su comportamiento y sus iniciativas, expresaron la conciencia de formar parte de un aparato que

dependía directamente del rey y del Consejo de la Suprema y General Inquisición, «di grandissima autorità, confidenza et grandezza, poi che non riconosce per superiore il Viceré»<sup>(14)</sup>. En 1572, el inquisidor Gasco se negó a someter su cédula de nombramiento a la ejecutoria virreinal<sup>(15)</sup>; hasta 1577 los inquisidores pretendieron colocar las armas y los blasones de su linaje en la sala de las audiencias<sup>(16)</sup>; en 1591, en época de carestía, promulgaron un edicto que obligaba a sus súbditos a que declararan la cosecha de trigo<sup>(17)</sup>; en 1592 promulgaron otro edicto general contra los proscritos y los encubridores de bandidos<sup>(18)</sup>. Fueron iniciativas que, junto a las duras competencias jurisdiccionales con las magistraturas regias, exaltaban los rasgos peculiares asumidos por el santo tribunal en la segunda mitad del siglo XVI, es decir, los de una organización con una fuerte tendencia a la autonomía y con propios objetivos a perseguir. Los virreyes se opusieron con firmeza a estas públicas expresiones de soberanía y, aunque conscientes de la fuerte incidencia política que los inquisidores ejercían sobre sus actividades de gobierno, exigieron el reconocimiento –al menos en el aspecto formal– de la propia autoridad y superioridad. Los escritores políticos sicilianos eran conscientes de la protección gozada en la corte por los inquisidores y, en consonancia con la realidad del poder, invitaban a los virreyes a la «onesta dissimulazione».

La correspondencia virreinal de aquellos años denunció –con preocupación e insistencia– la protección ofrecida de forma arrogante por los inquisidores a los familiares, nobles y burgueses, reos de gravísimos delitos como el homicidio, la fabricación de moneda falsa, el encubrimiento de bandidos, la sodomía. El acuerdo entre los inquisidores y la nobleza siciliana hispanizada hallaba también en el abuso de los títulos y de las «preeminencias» un ulterior elemento de cohesión. En 1578, en ocasión de la publicación en la catedral del edicto de fe, los inquisidores pretendieron estar sentados «en lugar alto, con sillas, dosel y almohadas de terciopelo», así como no levantarse para acompañar a la salida al virrey al final del sermón, según el habitual protocolo<sup>(19)</sup>. Marco Antonio Colonna les comunicó que no participaría en la ceremonia y los inquisidores estimaron, por consiguiente, el propio derecho a ocupar el mismo asiento, *in cornu Evangelii*, donde se sentaba el virrey. El protonotario del Reino se opuso a tal pretensión y les asignó el habitual lugar del arzobispo, *in cornu Epistulae*, eventualmente en una grada más alta. La reacción de Haedo y Peña fue la de ordenar la publicación del edicto sin su presencia y privar al protonotario de la familiadura<sup>(20)</sup>. La pragmática-concordia de 1580 reguló el protocolo, estableciendo que los inquisidores se sentasen en el lado de la Epístola, frente al virrey, «sopra d'un loro particolare tavolato alquanto più basso di quello che a lato dell'Evangelio sarà posto per l'istesso viceré»; les fue, también, permitido «tenere, se vorranno, panno, coscini e seggie con l'autorità e rappresentazione che a tal atto si richiede per esempio del popolo»<sup>(21)</sup>. Las gradas sucesivamente reconocidas por el ceremonial a los inquisidores fueron cinco –como las del virrey– pero sólo con ocasión de la lectura en la catedral del edicto de fe, día de su «representación y trono». Como era previsible, los inquisidores exigieron el mismo reconocimiento en las demás ocasiones, incluso menos importantes, como cuando asistían a la misa en un monasterio. «Demás de esto, se hazen llamar Señoría Ilustrísima, comprándola con haver introducido ellos el llamar Excelencia a los príncipes i duques, i Señoría Ilustrísima a los otros señores»<sup>(22)</sup>.

En 1577, los inquisidores Juan de Rojas y Diego de Haedo iniciaron una disputa de gran relevancia política-constitucional. Cuando llegaron a Palermo, el 21 de octubre, Marco Antonio Colonna estaba en Trápani, donde en agosto había sido sofocado un motín provocado por la creación de una nueva gabela<sup>(23)</sup>. Aunque se sabía que el virrey regresaría pronto a la capital, los inquisidores —sin advertir su llegada— comenzaron a ejercer la jurisdicción inquisitorial en los pleitos civiles y penales de sus aforados, así como en las causas de fe. Era el comportamiento arrogante de quien, explícitamente y con público escándalo, no quería reconocer en el virrey un superior suyo. Rojas y Haedo fueron al palacio virreinal el sucesivo 30 de octubre y presentaron a Marco Antonio Colonna sus cédulas de nombramiento. El virrey reprochó a los inquisidores que hubieran iniciado a ejercer la *iurisdictio* antes de comunicarle la elección y exigió los «poderes», o sea el documento en el que estaban especificados las comisiones y las potestades conferidas a ellos. Rojas y Haedo se justificaron y se disculparon formalmente por lo que se refería a la primera observación, pero se negaron a mostrar los «poderes», declarando que no tenían ninguna orden del inquisidor general y que estimaban suficiente la presentación de las cédulas reales. Colonna contestó que «era necesario —conforme a los capítulos, pragmáticas, uso y razón— presentar los dichos poderes» y someterlos a executoria, «pues el executoriarse aquí quanto viene de espiritual y temporal es lo que ha conservado a Su Magestad quanta jurisdicción en aquel Reyno de Sicilia tiene»<sup>(24)</sup>.

La executoria virreinal consistía en un control de legitimidad y mérito sobre los actos procedentes de la Sede Apostólica; había que comprobar, en efecto, antes de ejecutarlos, que no fueran lesivos a las regalías del soberano, ni al ordenamiento legislativo siciliano, ni a los privilegios del Reino. Este control había sido encomendado al Sacro Regio Consejo, el organismo consultivo compuesto por los supremos magistrados y oficiales regnícolas, del que eran miembros los dos abogados fiscales del Real Patrimonio y de la Gran Corte y a quienes se les reconoció una específica autoridad en la materia. En el capítulo 101 de las instrucciones a Marco Antonio Colonna, Felipe II le había recomendado «no consentir que con rescriptos apostólicos, ni de otra manera, se perjudique a nuestra jurisdicción, ni [a la] preheminenia real, ni a la [del tribunal] de la Monarquía»<sup>(25)</sup>. Dado que el inquisidor general actuaba como delegado pontificio, sus actos tenían que ser sometidos al regio *exequatur*, así como la bulas y los breves pontificios. Por diferentes motivos y temores, también el Parlamento siciliano en 1531 había solicitado a Carlos V que, conforme al capítulo 67 del rey Martín, «venendo in detto Regno Inquisitore delegato, habbia di mostrare allo Ill[ustre] Viceré che pro tempore sarà la bolla et provisione che portarà della administratione di suo officio; la quale si habbia di registrare in li registrii ordinari del detto Regno, accioché ogni uno possa vedere l'autorità et potestà che tiene: perché altrimenti detti Reverendi Inquisitori delegati, non dimostrando l'autorità che tengono, potriano quella eccedere, vessando li Regnicoli et vassalli di Vostra Cesarea Maestà», y el emperador había otorgado la gracia con las palabras «Servetur forma solita»<sup>(26)</sup>. Existía el precedente del inquisidor Gasco, recordado por Rojas y Haedo, que no había querido ni siquiera ejecutar su nombramiento: a todo esto, el virrey contrapuso, ofreciendo la relativa documentación, los casos muy numerosos de executorias tanto de los nombramientos como de las comi-

siones. Puesto que los inquisidores seguían oponiéndose a ello, Colonna convocó el Sacro Regio Consejo que declaró por unanimidad cómo los inquisidores estaban obligados a someter a executoria sus «poderes»<sup>271</sup>. Marco Antonio Colonna informó a Felipe II de lo ocurrido en una carta cifrada, preocupado también por las ostentaciones de fuerza de los inquisidores: «por quantos [virreyes] aqui han venido con gana de reformar las impertinencias de este Santo Officio, en ver su grandeza y jurisdicción aquí se han luego mudado, porque cierto digo a Vuestra Magestad que *quando vinieron a hablarme truxeron más de 200 [hombres a] caballos*». El virrey se remitía a la decisión del soberano, que pedía con insistencia: «El ordinario es que nunca se responde a los virreyes a este particular, y a los inquisidores se les aprueba y alaba esta ganancia de jurisdicción y assí van estas cosas»<sup>281</sup>.

Durante aquellos años, el santo tribunal atravesaba en Sicilia una fase de continuos éxitos y logró sin duda su máximo apogeo. La respuesta de Felipe II fue favorable a los inquisidores y les obligó a entregar al virrey la cédula de nombramiento, «*e solamente tal lettera, e non altri titoli o [di]spacci*»<sup>291</sup>. El papel de servidor del soberano, con cometidos de control de la fidelidad política de los gobernantes y de *intelligence* en relación a los extranjeros y a la población isleña, se superponía a la naturaleza pontificia y eclesiástica del oficio. El soberano juzgó predominante estas funciones y prefirió que las instrucciones y las comisiones otorgadas a los inquisidores permanecieran secretas.

La pragmática-concordia de 1580 reconoció al Santo Oficio una muy extensa competencia jurisdiccional a favor de los aforados –incluso por lo que se refiere a los homicidios y delitos atroces– y excluyó del fuero privilegiado poquísimos reatos: las deudas al erario, los pleitos feudales, los delitos cometidos en el ejercicio de un oficio público, las transgresiones a las órdenes emanadas en tiempos de peste y de guerra<sup>301</sup>. La pragmática decretó, asimismo, la legitimidad de las censuras inquisitoriales contra los magistrados regios y reservó a los mismos inquisidores la revocación de las excomuniones conminadas, que hasta entonces se habían apelado al tribunal de la Monarquía<sup>311</sup>, la antigua Apostólica Legacía, en la que desde 1581 fue nombrado un eclesiástico. A la elaboración del texto de la pragmática habían participado dos ministros de la Suprema, los licenciados Temiño y Salazar, y dos regentes del Consejo de Italia, Carvajal y Raimondetta. Éstos eran personajes estrechamente vinculados al Santo Oficio: Carvajal había sido inquisidor en Sicilia desde 1572 a 1577; Raimondo Raimondetta, consultor de la Inquisición y presidente del tribunal del Concistoro, editor de los *Capitula* del Reino y criatura del duque de Terranova, era sensible a la defensa de las instancias de la nobleza isleña, que en aquella época llegó a ser en gran parte aforada del Santo Oficio.

Dicha pragmática representó, según H. C. Lea, «a surrender», una rendición incondicionada impuesta por la Monarquía al poder virreinal y a las magistraturas ordinarias del Reino: «In Castile, a number of the more serious crimes were excepted from the exemption of familiars, but in Sicily they were entitled to the jurisdiction of the tribunal for all offences, however atrocious»<sup>321</sup>. Para el historiador norteamericano la doble política legislativa de Felipe II hallaba su explicación en el hecho de que en Castilla estaban presentes el soberano, su Corte, sus Consejos, y no habría sido tolerable que las

acciones delictivas de los aforados pusieran en discusión el gobierno de la justicia y la misma imagen de la soberanía.

A mi juicio, el sobresaliente papel político adquirido en Sicilia por el partido inquisitorial encierra motivaciones más complejas y profundas, vinculadas a los *arcana imperii* y a la voluntad de Felipe II de elevar el Santo Oficio a elemento específico del modelo administrativo español en la isla y a instrumento privilegiado del absolutismo; un instrumento enteramente riguroso y eficiente, no sólo con fines de «disciplinamiento» social, sino, principalmente, con fines de control sobre el aparato estatal. De tutor de la fe católica y su pureza, el Santo Oficio se había convertido en un poder paralelo al poder institucional virreinal establecido, en un organismo avalador de la fidelidad de los súbditos a la Corona, centinela y tutor de la conciencia política del virrey, del ministerio togado y de la oficialidad.

En los años sucesivos a la pragmática-concordia de 1580, frente a los frecuentes casos de delitos cometidos por los nobles, Marco Antonio Colonna y Alva de Liste denunciaron con insistencia a Felipe II que la nobleza solicitaba la familiadura exclusivamente para beneficiarse del fuero del Santo Oficio y que de hecho no cumplía con las actividades propias de oficial y de familiar; de esta manera se originó un debate sobre la utilidad y conveniencia de tal agregación. En un extenso informe, enviado en junio de 1590 al inquisidor general Quiroga<sup>(33)</sup>, Páramo rechazaba estas tesis y acusaba a los virreyes de ser «descubiertamente malicioso[s]»: «El fin pues principal que los lleva es el que siempre [h]an mostrado de la ambición [...] a que todas las cosas absolutamente pendan de ellos, lo qual en estos Señores Virreyes [h]a más lugar por hallarse setecientas leguas de Madrid con *voces et vices regias*, y ansy no pueden sufrir este tribunal por estar fuera de su subyección y mucho menos que los titulados y gente de qualidad, en quien ellos pretenden exercer el mero i mixto imperio y de quien se puede sacar más util, no esté[n] debaxo de su mano, offendiendose grandemente quando en las occurrencias declinan su jurisdicción. [...] Porque se persuaden que el Santo Offitio es su *sindico y espia que descubre sus acciones y designos*, y assí le aborrecen tinendole por *contrapeso y freno muy aspero*, el qual no todas vezes les dexa correr con su voluntad, de donde ordinario les nacen muchas queexas, atribuyendo a los Inquisidores las resoluciones y avisos que se dan en essa Corte de sus cosas».

El inquisidor Páramo remarcaba las razones políticas y de seguridad del estado que hacían indispensable incluir entre los *familiares* a nobles y a titulados; en primer lugar, éstos, «tratando sus negocios y conversando en la Inquisición, cuyos ministros son españoles, vienen a españolarse y hazerse más a la lengua y trato»; además, Páramo recordaba el decisivo papel desempeñado por el frente Inquisición-nobleza en los motines palermitanos de 1560 y en el Parlamento de 1585, y las dificultades que hallaba la Inquisición siciliana para seguir el modelo de Castilla, en donde una mayor religiosidad de las personas y la presencia del soberano justificaban algunas restricciones de su jurisdicción temporal; en Sicilia, por el contrario, a juicio del inquisidor, era necesario extenderla incluso a los delitos reservados al Príncipe, como el *crimen laesae maiestatis* y el homicidio. Él mismo advertía que el Santo Oficio perdería mucha de su autoridad y reputación en el caso de que hubiera sido privado de los nobles aforados: en la década en la que Carlos V había suspendido los privilegios y la jurisdicción inquisito-

rial, los nobles –puesto que ya no gozaban del fuero inquisitorial– no obligaron tampoco a sus vasallos a que obedecieran a dichos inquisidores. Careciendo de titulados aforados, la Inquisición llegaría a perder servidores de respeto a los que encomendar la compañía y la ejecución de los edictos y autos de fe, así como el hospedaje en tierras y lugares sin fondas. Frente al procedimiento *ex abrupto* y al rigor con que los virreyes castigaban a los nobles, éstos, indignados, dirigían la mirada al Santo Oficio para librarse de su ira y de sus ofensas; además, añadía Páramo, la nobleza napolitana, puesta en conocimiento de la intención de instaurar la Inquisición en Nápoles, observaba con atención cómo en Sicilia defendemos a nuestros aforados frente al ensañamiento del virrey en la aplicación del procedimiento *ex abrupto*. Así pues, concluía Páramo, si «para conservar limpio» el reino de Sicilia («rodeado de tan malos vezinos, como son Berbería, Malta y Calabria»), «cala común de la mayor parte de las naciones del mundo, fieles y infieles», «llena de muchos moros cristianos nuevos y de griegos») «es necesaria la Inquisición, es necessaríssimo que para que élla se conserve y haga effecto tenga la ayuda de estos oficiales y familiares principales»; «estos son los que dan reputación al Santo Oficio, los que le hazen estimado y que el resto de la gente le tengan respetto».

En conclusión, sustraer a la Inquisición de Sicilia los oficiales y los familiares pertenecientes a la nobleza, parlamentaria o no, base social insustituible sobre la que estaba fundado el consenso del santo tribunal en la isla, habría significado aniquilarlo y acarrear un daño irreparable al servicio real. El inquisidor Páramo manifestó plena conciencia de las funciones políticas del Santo Oficio de Sicilia con estas palabras: «La mayor fortaleza que se puede hazer en este Reyno es la de un tribunal tan propio y tan fiel de Su Magestad como el de la Inquisición, con tanta mano que pueda *no solo descubrir los disignos y pensamientos de los que gobiernan y son gobernados, pero oponerse y resistir a la execución de ellos*», y de esta manera «reprimir ruynes humores». El santo tribunal era el «pontual y secreto» informador del soberano sobre «como pase su gobierno y justicia»; además, de hecho, constituía una «chancilleria o tribunal de ministros españoles para la administración de la justicia», superando de este modo los obstáculos forales representados por el privilegio de la nacionalidad de los oficiales del Reino.

A pesar de estas tesis, ampliamente difundidas en los ambientes filoquisitoriales madriños, los gravísimos casos de homicidio de los que eran responsables altos exponentes de la nobleza regnícola provocaron en 1591 un cambio de rumbo en el ámbito legislativo. Una pragmática real excluyó del fuero privilegiado el delito de homicidio premeditado y prohibió que los nobles titulares de feudos fueran nombrados como oficiales y familiares del Santo Oficio<sup>(34)</sup>. Dicha decisión soberana puso de manifiesto, a juicio de H. C. Lea, la sincera reacción del rey prudente al escandaloso nivel alcanzado en Sicilia por el Santo Oficio en la protección de sus aforados delincuentes<sup>(35)</sup>. La pragmática de 1591, sin embargo, respondía a las habituales técnicas de gobierno utilizadas por la Corte española en relación a Sicilia. La Corona confiaba en la Inquisición para alcanzar fines más políticos que de justicia: una vez conseguidos los primeros, se mostraba favorable al restablecimiento de los equilibrios alterados. Ciertamente esta disposición fracturó el bloque de poder nobleza-inquisición y puso en tela de juicio el

«imperialismo jurisdiccional» de Valdés (1547-66), ratificado en los años 1573-94 por el inquisidor general Quiroga<sup>(36)</sup> y puesto en práctica en Sicilia por sus fieles colaboradores, entre quienes destacan por su fuerte personalidad las figuras de Haedo, Peña y Páramo.

El proyecto confesional de Felipe II había mirado a la religión como un insustituible instrumento de gobierno que unificaba reinos constitucionalmente diversos, y había reconocido en la Inquisición la piedra angular de la Monarquía Hispánica, la herramienta que garantizaba su propia conservación y unidad a través de la represión de las herejías, el «disciplinamiento» de los comportamientos sociales, los procesos de interiorización por parte de los súbditos de reglas y normas de vida. En la última época de su reinado, el monarca y sus consejeros –los de la «Junta de noche» y después de la «Junta de Gobierno», Vázquez, Chinchón, Idiáquez, Moura<sup>(37)</sup>– construyeron un modelo de gobierno en el que no había más espacio para una «preeminencia» y «reputación» del Santo Oficio que se basara en los homicidios y en los abusos impunes de sus aforados. Estos delitos estaban en contradicción con la soberanía real, la credibilidad del poder central, la «identidad justiciera» que constituía «la forma y esencia substancial de la magestad real»<sup>(38)</sup>. Los inquisidores, titulares de un poder pontificio muy amplio en las materias espirituales y en las causas de fe, gozaban de la *iurisdictio temporalis* sobre sus propios ministros, oficiales y familiares por delegación y concesión regia. Dicha jurisdicción tenía un carácter subalterno, delegado y meramente ejecutivo, su concesión era precaria y subordinada a la voluntad de Felipe II que, en 1591, decidió modificar de manera significativa los espacios jurisdiccionales inquisitoriales. La petición de abrogar esta real disposición, que de alguna manera deterioraba la alianza entre el santo tribunal y la nobleza, fue elevada al rey por el partido inquisitorial de forma continua y apremiante, ya sea en los años anteriores a la segunda pragmática-concordia de 1597, con la que Felipe II prosiguió –como veremos– esta política legislativa, ya sea sucesivamente.

3. La pragmática-concordia del 1580 había encomendado a una junta mixta compuesta por dos inquisidores y dos jueces de la Gran Corte la resolución de los conflictos de competencia entre las magistraturas reales y el Santo Oficio<sup>(39)</sup>. En el caso de que no se hallara una solución, los expedientes procesuales se transmitirían a Madrid para que fueran examinados por una segunda junta; por fin, si no se llegaba a un acuerdo, el soberano tomaría la resolución final. De hecho, no fue posible evitar el enfrentamiento violento entre las dos jurisdicciones. La cotidiana y dura conflictualidad entre los virreyes y los inquisidores indujo a Marco Antonio Colonna a sospechar que estos últimos cometían abusos tan graves (excomuniones, interdictos, rechazo a participar en las juntas, falsificación de las matrículas de los familiares, defensa a ultranza de sus aforados por medio de falsos testimonios y en algunos casos incluso a mano armada, encarcelamientos de jueces regios, etc.) con el fin de que se les privara del oficio y que consiguieran el *promoveatur ut amoveatur*<sup>(40)</sup>. Y en efecto en 1579, Gasco había sido designado para ocupar la importante diócesis de Mazara y así mismo Haedo –en aquellos años duro adversario de Marco Antonio– fue elegido en 1585 obispo de Agrigento y en 1589 arzobispo de Palermo.

Los inquisidores, muy a menudo, se negaban a reunirse en la junta con los ministros



reales, declarando que el caso era «claro» y no dudoso y que, por lo tanto, era de su propia competencia; enviaban al tribunal de la Gran Corte una carta inhibitoria en la que se solicitaba la pronta remisión del reo y de los expedientes del proceso y, si el tribunal de la Gran Corte se negaba a obedecer, ellos mismos excomunicaban inmediatamente a los jueces, publicando las bulas en las iglesias principales, en las lonjas, en las plazas públicas<sup>(41)</sup>. Todo ello originaba la completa parálisis de las actividades judiciales de la isla, ya que, según el derecho común, el ministro excomulgado no podía desempeñar actividades inherentes a su función. En 1594, el virrey conde de Olivares, ante el problema de los remedios jurídicos y canónicos que se podían oponer a las excomuniones manifiestamente injustas, ilícitas y nulas, considerado que el soberano había prohibido la apelación al juez de la Monarquía, sugería a los jueces excomulgados que recurrieran al ordinario eclesiástico, tal y como había ocurrido en tiempos de Marco Antonio Colonna y de Alva de Liste<sup>(42)</sup>.

Hay que señalar que los supremos magistrados de la isla —a excepción de los presidentes— eran nombrados por dos años, al término de los cuales volvían a ejercer la profesión forense<sup>(43)</sup>; ellos preferían ceder a las reivindicaciones de los inquisidores, renunciar a la defensa de la jurisdicción real y de este modo evitar la infamia y los daños morales y económicos originados por la excomunicación. Los pocos casos de resistencia al chantaje inquisitorial se explican más por la fuerte personalidad de algunos virreyes, como Marco Antonio Colonna o el conde de Olivares, que por la escandalosa resonancia del delito que había provocado el conflicto jurisdiccional y, en todos estos casos, tanto los virreyes como los inquisidores inundaron la corte madrileña con sus informes y memoriales. Además, en las disputas más duras, los virreyes estuvieron obligados a enviar su correspondencia a Madrid con el correo a su cargo y, en unos casos, expidieron a la corte a acreditados exponentes del alto ministerio togado para que informaran a Felipe II de la gravedad del caso y de sus consecuencias en detrimento de las regalías del soberano en el ámbito jurídico y constitucional. Todo ello ocurrió en 1594 con el virrey conde de Olivares<sup>(44)</sup>, el cual —a diferencia de Marco Antonio Colonna y de Alva de Liste— trató de evitar, dentro de lo que cabe, el enfrentamiento directo: «Yo, viendo los escándalos que en esto intervienen sin poderse evitar, he tomado el otro camino, remitiendo la venganza i el castigo a Vuestra Magestad, i que los excessos de los inquisidores necessiten a Vuestra Magestad (cuya *en cierta manera* viene a ser la offensa i deservicio) a poner de una vez remedio a todo esto»<sup>(45)</sup>.

La legislación regia prohibía a los inquisidores que excomunicaran a los virreyes. Estos últimos, en algunos casos, con el fin de evitar las censuras de los jueces de la Gran Corte, ordenaron el encarcelamiento del reo y su detención «en nombre de Su Majestad y del inquisidor general»<sup>(46)</sup>. En 1588, la irritación de los inquisidores Peña y Páramo frente a tal expediente, funcional para avocar los procesos, llegó al extremo de amenazar al duque Alva de Liste por medio de un «nuevo remedio y novedad no vista en Sicilia», explícita alusión a una cédula de excomunicación. A través del consultor Escudero, el duque comunicó a los inquisidores que era «novedad grande hazer fieros a los virreyes» y que, «si ellos usasen de novedad no vista», «también Su Excelencia haría lo mesmo». Estas palabras reflejan la amenaza de encarcelar a los inquisidores en el caso de que se hubieran atrevido a infringir las órdenes reales y a excomunicar al supremo representante del soberano en la isla<sup>(47)</sup>.

Para deliberar los contenciosos civiles<sup>488</sup> y los procesos criminales de los familiares y de los oficiales, era naturalmente necesaria la colaboración de los letrados. Los inquisidores solían nombrar como consultores del santo tribunal a los jueces bienales en servicio en el tribunal de la Gran Corte y del Concistoro. Este era el modo para vincular al partido inquisitorial a algunos exponentes del alto ministerio togado siciliano, atraídos por el prestigio del cargo y por los generosos ingresos con que se remuneraba su actividad jurisdiccional. En la matrícula del Santo Oficio de 1577 figuraban los más ilustres miembros del ministerio togado: Luca Cifuentes, Modesto Gambacorta y Francesco Navas de Puebla, presidentes de los tres supremos tribunales del Reino, y los jueces Francesco Saladino, Antonio Scibecca, Benedetto Porcaro, Antonino Basso, Vincenzo Botoner<sup>489</sup>. Marco Antonio Colonna había recordado a Felipe II que estos cometidos distraían y alejaban a los jueces regios de sus propias ocupaciones institucionales, y por ello les había ordenado que no fueran al Castel a mar, residencia de los inquisidores, para juzgar las causas de los aforados del Santo Oficio<sup>490</sup>. Felipe II decidió que los inquisidores de Sicilia establecieran algunos días fijos para las audiencias del fuero privilegiado, de manera que ello no interfiriera en las actividades ordinarias –consultivas y jurisdiccionales– desempeñadas por los jueces regios<sup>491</sup>.

Estos magistrados, estando al servicio del Santo Oficio, gozaban de los privilegios propios del *status* de oficial inquisitorial, incluido el del fuero particular. De este modo se producía la paradójica condición de sujetos que en calidad de jueces regios estaban al servicio del rey, del que eran representantes e intermediarios, y que al mismo tiempo quedaban dispensados de la jurisdicción real ordinaria como consultores de la Inquisición. Para evitar este inconveniente –denunciado por Marco Antonio Colonna– el Consejo de Italia había sugerido al soberano que ordenara a los magistrados sicilianos consultores de la Inquisición la renuncia al privilegio del fuero durante los dos años del mandato<sup>492</sup>. Felipe II, confirmando su abierta actitud de favor hacia el Santo Oficio, decretó que todos los consultores gozasen de los mismos privilegios que los demás oficiales no asalariados; en el caso de que fueran al mismo tiempo jueces regios, los excluyó del beneficio del fuero solamente por lo que se refería a los delitos cometidos en el ejercicio del oficio<sup>493</sup>. Por lo que respecta a este último punto el rey prudente no compartió la tesis radical de los regentes Ramondetta y Carvajal, según los cuales esta decisión podía ocasionar inconvenientes muy graves: en casos concretos, efectivamente, no hubiera sido fácil evitar toda «duda, confusión y competencia si el tal delito se cometió *pretextu officii* o no» y por ello, era preferible la total exclusión de los jueces regios del privilegio del fuero inquisitorial, siendo «mejor la claridad y distinción de jurisdicciones que la mezcla y confusión»<sup>494</sup>.

4. Francesco Fortunato en sus *Avertimientos* de 1591, dirigidos a Felipe II y a su entorno dirigente madrileño, había dado muestras de entender que el incierto equilibrio y la alternancia de las preferencias entre las dos instituciones contrapuestas –la civil y la inquisitorial– se originaban en el mismo epicentro de la Monarquía. Fortunato sugería –de la misma manera que con anterioridad había hecho Marco Antonio Colonna– que se encomendara al virrey («que representa la [persona] del Rey») y a sus ministros togados la revisión de las sentencias civiles y criminales promulgadas por la Inquisición. Dos tipos de razonamientos habían sido expuestos por Fortunato a sostén de esta

reforma: en primer lugar, al igual que dos espadas no pueden estar en la misma vaina, así mismo no podían subsistir en un mismo Reino dos jurisdicciones «tan separadas y distintas una de otra [...] sin que la una no sea reconocida de la otra mayor». En el caso de que no se hubiera operado en esta dirección, el incumplimiento de la legislación real por parte de los aforados del Santo Oficio y la protección que les habían concedido los inquisidores comportaría «que en una misma República aya diferencia de leyes y observancia dellas, cosa perniciosísima para el buen gobierno»<sup>(55)</sup>.

Fortunato daba indicaciones muy agudas incluso sobre las repercusiones económicas del excesivo poder otorgado a la Inquisición. La gran carestía de 1590-91 y las sucesivas malas cosechas causaron en los «populares» y en las clases subalternas un clima de creciente antiespañolismo. La mayor parte de la producción de trigo, observaba Francesco Fortunato, se hallaba «en poder de los más ricos y facultosos burgeses, que son del Santo Officio», y sus inmunidades y exenciones provocaban graves desequilibrios en los mercados; además, desde el punto de vista jurídico y de la soberanía, parecía grave la pretensión de los inquisidores «*de dar ellos las ordenes... [de lo] que han de observar los de su fuero, como si fuesen ellos los legisladores y aquí hubiese dos gobernadores*. Acabará con dezir que nunca los Virreyes podran gobernar como conviene y más este año [de carestía], si en lo que toca a esta parte del gobierno en las cosas frumentarias y de cargadores no la tuvieren ellos absoluta y por vía del Rey; intiando no será muy difícil a remediarse esto, pues de derecho deven estar exceptuados estos casos»<sup>(56)</sup>.

Efectivamente, el «gobierno del trigo» constituía uno de los sectores más delicados y de mayor responsabilidad de la política virreinal. Después de haber registrado las declaraciones de la cosecha anual de trigo, era muy importante, si ésta era abundante, la atenta estima de la cantidad de los permisos de exportación (denominados en Sicilia «*tratte*») que se podían destinar a la venta en provecho del erario, y su precio: había que evitar, en efecto, no sólo que las ciudades del Reino quedaran sin suministro de trigo a causa de la exorbitante venta de las «*tratte*», sino también que, al contrario, ante una exagerada prudencia, la oferta interior del producto fuera excesiva, con el consiguiente descenso en el nivel remunerativo de los precios.

El Consejo de Italia juzgó firmemente que en esta materia era inadmisibile la intervención de los inquisidores, tanto por lo que se refería a la policía administrativa, como a la jurisdiccional. Según los regentes, en caso de quiebra de un oficial almacenero y depositario de trigo por cuenta del soberano, sus «*fiadores*», incluso aforados de la Inquisición, eran patrimonialmente responsables puesto que en el juramento de garantía se habían comprometido «con amplia renunciación jurada de qualesquier privilegios de foro con la cláusula *ut bancus*». Los inquisidores («superiores, no dueños de sus suditos respeto de jurisdicción»), ya que se podía renunciar al fuero inquisitorial, no podían reivindicarlo. En caso contrario, el erario real quedaría gravemente perjudicado: la pérdida de reputación ocasionaría la disminución de la cantidad de trigo destinado al silo público y de los ingresos de exportación. Los regentes atestiguaban, además, su concepción del estado-máquina. «reloj», «órgano afinado», que funcionaba a través de los mecanismos perfectos de las leyes, el eficiente aparato administrativo, sus ministros, jueces y oficiales: «se confundiría, por uno solo que saliese de esta regla, toda la

máquina y se estorvería la contribución uniforme ordenada por las leyes en manera de un instrumento musical, que por una sola cuerda disonante se desconcierta todo»<sup>(57)</sup>.

En 1593 ocurrió un gravísimo suceso en el pueblo de Terranova, donde la adulteración del trigo produjo casos de intoxicación mortal. Al erario real, afirmaba el virrey conde de Olivares, «importa que el pan que sale de los cargadores de este Reyno tenga opinión de perfectísimo» y por lo tanto el almacenero público responsable había de ser inmediatamente juzgado y severamente castigado. Sin embargo se trataba de Giovan Vincenzo Cannizzaro, hijo del barón de la Granella, oficial del Santo Oficio y hermano del maestro notario del tribunal del Real Patrimonio, ante el cual se celebraba el juicio. Su hermano influenciaba tanto a los testigos a los que tomaba deposición, como a los jueces del tribunal y, mientras que el procesado iba a ser interrogado bajo tortura, llegaron tempestivamente las cartas inhibitorias de los inquisidores<sup>(58)</sup>. Se originó un conflicto tan devastador que el virrey Olivares, considerando que la materia afectaba a los intereses del erario real, así como a la pública fe y a la salud de los súbditos, envió a la corte al maestro racional Giovan Battista Celestre y al procurador fiscal Alfonso De Franchis, puesto que «en ninguna manera se podía dar a entender estas cosas solo con papeles»<sup>(59)</sup>; incluso el inquisidor Páramo fue a Madrid para defender las pretensiones inquisitoriales<sup>(60)</sup>.

Felipe II encomendó el examen de este caso y de otras «diferencias» a una junta formada por los inquisidores Juan de Zúñiga y Juan Álvarez de Caldas y por los regentes Bartolomeo Brugnoli y Diego Escudero, a los que ordenó que se congregaran en la sala del Consejo de Italia del palacio real, asistidos por los secretarios Arenillas de Reynoso y Francisco Idiáquez<sup>(61)</sup>. Tras una primera sesión no fue posible convocar la junta durante un mes, puesto que Zúñiga comunicó que estaba muy ocupado en la sustitución del inquisidor general gravemente enfermo. Fallecido el cardenal Gaspar de Quiroga, los inquisidores se opusieron a reunirse en la sala del Consejo de Italia, iniciando con fines dilatorios una pretextuosa controversia protocolaria acerca de la sede de los encuentros. El regente Brugnoli, de acuerdo con el colega Escudero, se declaró dispuesto a que las sesiones se celebraran «in quali si voglia luogo, ché questo poco importa alla sostancia delle cose», y Felipe II, con la recomendación «que no se pierda tiempo», consintió que los ministros se reunieran en la casa del inquisidor «más antiguo», Juan de Zúñiga<sup>(62)</sup>. Las dos consultas presentadas por la junta al soberano el 25 de marzo de 1595 y el 12 de mayo de 1596, constituyeron los trabajos preliminares de la importante pragmática-concordia promulgada por Felipe II en 1597. Por lo que respecta al caso Terranova, el soberano acogió con agrado la propuesta de la junta: «Se algunos familiares siendo magazeneros, que tubieren titulo mio, y sus substitutos, cometieren fraude en sus officio[s] echando agua en los trigos, tierra, paja o otras cosas para crecerlos, o hizieren otra fraude en ello, mis juezes seglares conozcan de tal delito, y los inquisidores no los defiendan ni amparen»<sup>(63)</sup>.

En otra carta, el virrey conde de Olivares refería los fraudes en el peso y en la calidad de las mercancías por parte de los vendedores de comestibles, aforados del Santo Oficio, que quedaron impunes en Mesina y en Palermo gracias a la benevolencia de los jueces inquisitoriales e indicaba la mejor calidad de la vida en los pueblos de la sierra isleña donde no residían comisarios del Santo Oficio: «Suplico a Vuestra Magestad

mande considerar si en Toledo se huviese de yr a pedir justicia a los inquisidores de los pesos falsos que tienen los tenderos i otras cossas semejantes, qual andaría el govier-no»; el virrey se preguntaba cómo estas materias podían afectar a «lo essencial de la Inquisición i de la deidad, que tanto conviene que aya en los inquisidores; i no den a Vuestra Magestad a entender que aya causa, ni ninguna necesidad de hazer esta diferencia, ni que ayan menester para la buena administración de sus officios, lo que es en tanto daño de la República»<sup>64</sup>.

En otro memorial anónimo, redactado en italiano entre 1591 y 1597, queda patente la mención continua de los problemas económicos: todos los mercaderes, extranjeros y sicilianos, eran familiares de la Inquisición de Sicilia, con la peligrosa consecuencia que la jurisdicción privilegiada inquisitorial producía graves perturbaciones en tema de cambios, seguros, quiebras, «riveli frumentari» (declaración de la cosecha de trigo), repartición de los donativos y pago de las gabelas. También aquí surgió la cuestión de la pluralidad de las leyes, que se reflejaba en una desigualdad en las condiciones jurídicas entre «persone principali e potenti», por una parte, «gente bassa e debole», por la otra. Por ello, el anónimo proponía que a la Inquisición se le revocara cualquier jurisdicción privilegiada y temporal, aunque él mismo intuía que razones políticas, motivos arcanos, «cause che trascendono la comune intelligenza», disuadirían al soberano de tomar una solución tan radical<sup>65</sup>.

5. En la pragmática de 1597, Felipe II recogió algunas de las propuestas encaminadas a limitar la esfera jurisdiccional del Santo Oficio y el número excesivo de sus familiares, ya puestas de manifiesto por los *Avertimientos* de Francesco Fortunato y por la memoria anónima. El rey prudente confirmó la antigua plantilla de 1575 que había enrolado 149 oficiales y 1572 familiares diseminados por las ciudades del Reino y, asimismo, permitió a los inquisidores que nombraran a un familiar en los caseríos de más de sesenta vecinos, a condición de que fuera residente. Una novedad importante consistió en ordenar a los inquisidores que depositaran las matrículas de los aforados en el tribunal de la Gran Corte, a la que había que notificar cualquier variación sucesiva. En 1597, se destinaron, también, a la exclusiva competencia de la jurisdicción real numerosos delitos, a saber: el *crimen laesae maiestatis in primo capite* hacia el soberano y sus representantes y consejeros, la sedición, el «rpto de mujer honesta», las falsedades de los notarios, los homicidios y las heridas dolosas, las deudas por motivos fiscales en relación al patrimonio real y de las ciudades, los fraudes cometidos por los banqueros públicos, por los almaceneros y por los tenderos. Fue prohibido a los inquisidores que intimaran censuras contra los virreyes, así como que los familiares circularan por las ciudades con armas de fuego y a estos le fue reconocido el derecho a renunciar expresamente al *privilegium fori*<sup>66</sup>.

Se trataba de importantes concesiones en favor de los tribunales reales, ultrajados muy a menudo por las reivindicaciones inquisitoriales. El examen de los trabajos preparatorios desarrollados por la junta<sup>67</sup> para elaborar los artículos de la pragmática revela el papel decisivo jugado por el regente Brugnoli con el fin de incluir también la sedición y la violencia carnal entre los delitos reservados a la justicia real. La mayoría de los miembros de la junta habría preferido no incluir la sedición, estimando muy amplio el caso en cuestión y poco probable que los aforados del Santo Oficio pudieran man-

chase con semejante culpa. Brugnoli, en un «voto singular» suyo, cuyas razones fueron compartidas por el rey prudente, sostuvo que se trataba de un «delito tan cerca al de la lesa magestad», del que se originaban graves turbativas para la seguridad del Reino. ¿Cómo se podía sustraer a los jueces reales la *iurisdictio* sobre un delito que ponía en peligro la misma conservación de la monarquía? Son interesantes, también desde el punto de vista antropológico, los argumentos que Brugnoli presentó en materia de violencia carnal, y que fueron juzgados persuasivos por Felipe II: «viendo los ofendidos andar en su misma ciudad libremente a los violadores de sus mugeres, podrían resolverse a vengarse por sus propias personas y causar en el Reyno tumultos de consideración con escandalo de la justicia y poca seguridad de los súbditos de Vuestra Magestad»<sup>(68)</sup>.

De la confrontación entre las normas elaboradas por la junta y las promulgadas al final, destaca la voluntad de Felipe II de comprimir la fuerte tendencia hacia una autonomía de los poderes expresada por la Suprema a través de los abusos inquisitoriales y la afirmación de la preeminencia de la soberanía real. A estos objetivos de carácter político se unía la voluntad de realizar una defensa más rigurosa de la justicia y la atención a eliminar del texto legislativo, dentro de lo que cabe, ambigüedades y zonas de sombras que darían espacio a interpretaciones subrepticias y a nuevos enfrentamientos. Por ejemplo, la expresa prohibición de excomunicar a los virreyes fue el fruto de la directa intervención del soberano. El texto elaborado por la junta se limitaba a prescribir «que los inquisidores no procedan sin licencia y orden del inquisidor general por censuras contra la persona del virrey». El soberano anotó en el margen de la consulta que en estos casos, «sin proveer nada», fuera advertido, «y yo mandaré lo que convenga». Los ministros se justificaron declarando que habían presupuesto que el inquisidor general «no querrá que se trate [de este asunto] si no en cosa muy grave y de mucho peligro, y que en tal caso no lo proveerá sin consulta y mandado de Vuestra Magestad». Consciente de cuánto era peligroso dejar espacios a la ambigüedad de la letra legis que, de hecho, ampliaría —en detrimento de la soberanía— la discrecionalidad de la Suprema y la mediación de los letrados, Felipe II anotó lacónicamente: «Assí como parece a los quatro, mas declárase que el inquisidor general no dé la orden que se dize sin consulta y aprobación mia»; y en la misma página añadió: «declárese de manera que por ninguna vía se pueda proceder por censuras contra las personas de los virreyes sin que yo lo intienda»<sup>(69)</sup>.

En caso de disputas de competencia, la junta había concordado que los inquisidores no podían convocar a los jueces regios ante el tribunal «por via de jurisdicción, ni por el nuncio de la Inquisición, si no por otra persona y con todo comedimiento». Felipe II, como atención hacia sus ministros, quiso que éstos pudieran elegir entre ir al tribunal del Santo Oficio o a casa del inquisidor más antiguo. Además, el soberano excluyó del foro privilegiado todos los delitos cometidos antes de la inscripción<sup>70</sup>, mientras que en la ambigua redacción del texto propuesta por la junta la exclusión se refería a los delitos cometidos en los seis meses precedentes al nombramiento como familiar.

Los inquisidores Juan de Zúñiga y Juan de Álvarez de Caldas querían que la prohibición de otorgar la familiadura a los nobles, decretada en la pragmática de 1591, estuviera limitada a los barones titulares de feudos habitados, con voto en el Parlamento, y

que no afectara a los muy numerosos barones dueños de feudos no habitados: dicha exclusión había comportado, según los inquisidores, «ser estimada en poco la Inquisición y no se poder hazer muchas execuciones y prisiones, sino es con mucha difficultad, que antes se hazían facilmente por los titulados y barones, por ser aquella tierra tan montuosa». Los inquisidores exigían, también, incluir entre los familiares por lo menos a treinta barones parlamentarios elegidos entre «los más quietos y pacíficos». Por el contrario, los dos regentes del Consejo de Italia Bartolomeo Brugnoli y Diego Escudero pusieron de manifiesto que «en Sicilia más que en otra parte cumple que los titulados y barones esten debaxo de la jurisdicción del virrey»; ellos recordaron los recientes casos del conde de Mussomeli, del marqués de la Roccella y del conde de Racalmuto que habían empujado a Felipe II a promulgar la pragmática de 1591: «la razón que se entiende movió a Vuestra Magestad para quitar a la Inquisición los barones y titulados fue por ser personas poderosas». Si hubiera sido otorgada la familiadura a treinta barones parlamentarios, estos «se ternían por ello en mucho más que hasta agora, sin tener respecto al virrey, y cometiendo delitos con mayor libertad, sabiendo que en la Inquisición no se les ha de dar pena de sangre, y havría en esto acrecentados inconvenientes mayores que antes». Eran argumentos plenamente compartidos por Felipe II, que en esta materia había seguido con firmeza las pautas del padre, negándose a abolir el procedimiento *ex abrupto*, una vez más objeto de debate en el Parlamento de 1591<sup>(71)</sup>. El rey prudente ofreció una interpretación auténtica de la pragmática de 1591: «mi intención fue y es que dicha orden comprehenda tanto a los barones que tienen vassallos y voto en los parlamentos, quanto todos los demás feudatarios que se llaman barones, que los unos y los otros generalmente no gozen del foro de la Inquisición»<sup>(72)</sup>.

Por lo que concierne a los conflictos de competencia, Felipe II confirmó todo lo que ya había sido contemplado por la pragmática-concordia de 1580: una junta palermitana, compuesta por dos magistrados regios y por dos inquisidores, habría debido hallar una solución al respecto. Si no se hubiera llegado a un acuerdo, habría habido que transferir el proceso a Madrid y «fratanto che in ciò si piglierà resolutione, non si faccia novità, né [si] proceda in quel negotio». La situación era distinta si los inquisidores se hubieran opuesto a la junta, declarando que el caso no era dudoso y que era de su propia jurisdicción. Los jueces regios, sintiéndose perjudicados, estaban obligados a enviar a la corte el proceso. También en este punto fue decisiva la intervención de Felipe II, sabedor que en los conflictos de competencia prevalecía la situación de hecho y que, en el caso de que el aforado hubiera sido retenido en las cárceles regias, los inquisidores habrían recurrido a las censuras contra los jueces de la Gran Corte: por todo ello, el soberano anotó en el margen de la consulta que los inquisidores, «entre tanto que se viene a consultar [al rey], absuelvan [los excomulgados]». Tal añadido quedó reflejado en la pragmática, que conminó una pena de dos mil quinientos escudos a cargo de los ministros reales e inquisitoriales que hubieran desobedecido a las nuevas normas y que hubieran ocasionado infundadas competencias.

La situación de conflictualidad antes descrita fue, sin embargo, una constante que siguió marcando el reino de Sicilia. Unos meses después de la promulgación surgieron contenciosos en relación a todos los capítulos de la pragmática y, como observó el virrey duque de Maqueda, era de opinión pública que «la concordia no había servido de

nada si la voluntad de los interlocutores no es buena»<sup>731</sup>. El meollo del problema residía en estas palabras, puesto que las disputas de jurisdicción escondían y revelaban —como era notorio a todo el mundo— sendas voluntades de poder en conflicto. Los numerosos memoriales presentados en Madrid, sea por los inquisidores sea por los virreyes, obligaron en diversas ocasiones a Felipe II a encargar a la junta mixta —formada por dos inquisidores de la Suprema y por dos regentes del Consejo de Italia— que dirimiera los contenciosos que se habían verificado en Sicilia. Ello comportó en los pleitos civiles ingentes gastos judiciales para las partes en litigio, mientras que en los procesos criminales las largas dilaciones invalidaban las expectativas de justicia de la parte ofendida. También en los casos, en verdad no muy frecuentes, en los que Felipe II y su consejos decretaron la *iurisdictio* del tribunal de la Gran Corte, los inquisidores de Sicilia no dejaron de interferir en los procesos y de contaminar las pruebas, con el objeto de proteger a sus familiares. Por ejemplo, mientras que se investigaba contra el conde de Mussomeli, acusado de homicidio, algunos comisarios delegados del santo Oficio recogieron informes y testimonios a descargo del conde<sup>732</sup>.

Con el fin de resolver inmediatamente los conflictos y decapitar esta «idria», la posible solución, ya apuntada por Marco Antonio Colonna en 1579, e insistentemente replanteada por los virreyes Olivares y Maqueda, era la de extender a Sicilia la solución llevada ya a cabo «con tanto beneficio» en Castilla y Aragón: «una persona deputada por Vuestra Magestad como rey de este Reino [...] que quitase las fuerzas que de una parte a otra se hizieren i que sea tercero en todos los casos y cosas en la que los inquisidores i juezes temporales no concordaren». Dicho «juez tercero», también eclesiástico, que fuera de agrado de la Suprema, tenía que participar en las juntas palermitanas y expresar el voto decisivo en el caso de que permaneciese la discordia entre los representantes de la Inquisición y de la Gran Corte. Había que destinar a los dos supremos consejos madrileños solamente aquellos casos no previstos por las pragmáticas, casos en los que se imponía la resolución soberana con valor de ley general<sup>733</sup>. Hay que apuntar que en 1594, incluso el arzobispo de Palermo, el ex inquisidor Haedo, sugería a Felipe II «dar nuevo remedio»: «Y assí, por descargo de mi conciencia como fiel criado de Vuestra Magestad y por la inteligencia que de más de diez i seis años [h]e tenido y tengo de la administración de la justicia en este Reyno, digo que convernía que en Palermo hubiese persona neutral, que tuviese autoridad, que ajustase estas controversias sin que fuesen a España»<sup>734</sup>. Sin embargo —y hay que ponerlo de relieve súbito— el rey prudente no aceptó esta solución, ni renunció a la preciosa colaboración del Santo Oficio a la hora de controlar las actividades y la conciencia política de los virreyes y del ministerio togado, y en la pragmática del 1597 otorgó a los inquisidores «la espada de las censuras», incluso en materias no concernientes a la fe católica, permitiéndoles que siguieran excomulgando a los magistrados, y negando a los excomunicados la posibilidad de apelarse al Juez de la Monarquía. La concesión o no de la absolución fue, por ello, una prerrogativa exclusiva de los inquisidores.

Los ásperos conflictos políticos y jurisdiccionales continuaron durante todo el siglo XVII, a pesar de la última pragmática-concordia de 1635<sup>735</sup>, promulgada con el fin de prevenir y resolver desordenes y tensiones. Todo ello quedó ratificado de forma patente por la *Consulta Magna*, redactada en 1696 por una junta especial compuesta por los



representantes de todos los grandes Consejos de la Corona, a excepción de la Suprema<sup>(78)</sup>. La junta hacía hincapié en que las concordias y las órdenes reales no eran acatadas por el tribunal del Santo Oficio de Sicilia. Los inquisidores se consideraban exentos de cualquier regla e imponían sus arbitrios por medio de la extendida práctica de las excomuniones. Las demasiadas y frecuentes controversias jurisdiccionales con las magistraturas ordinarias ocasionaban graves inconvenientes al orden público y a la vida económica de la Monarquía. Los remedios propuestos a Carlos II eran idénticos a los que un siglo antes habían sido sugeridos a Felipe II: había que prohibir a los inquisidores que promulgaran excomuniones contra magistrados y oficiales reales que reivindicaban la jurisdicción temporal en el delito en cuestión, había que reducir el número de los aforados y las materias incluidas en el fuero privilegiado y había que encomendar al virrey la definitiva resolución de los conflictos de competencia jurisdiccional<sup>(79)</sup>. Sólo de esta manera habría sido posible realizar en la isla un objetivo irrenunciable, expresamente declarado por el rey prudente al principio de su reinado: armonizar y garantizar «assí la authoridad del Santo Oficio, como la buena administración de la justicia»<sup>(80)</sup>. De hecho, en la Sicilia de los Austrias, este objetivo se quedó solamente en una utopía.

#### ABREVIATURAS UTILIZADAS

- AGS = Archivo General de Simancas
- AHNM = Archivo Histórico Nacional de Madrid
- BCP = Biblioteca Comunale di Palermo
- BNM = Biblioteca Nacional de Madrid

## NOTAS

- <sup>(1)</sup> P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, «Repensar el Imperio», en H. G. KOENIGSBERGER, *La práctica del Imperio*, Revista de Occidente, Madrid 1975, p. 256 (es la traducción de *The Practice of Empire*, Cornell University Press, Ithaca-New York 1969, un clásico estudio ya publicado en Londres, en 1951, con el título *The Government of Sicily under Philip II of Spain*).
- <sup>(2)</sup> Sobre la estructura organizativa de la Inquisición en Sicilia y sobre su actividad represiva, véanse las clásicas páginas de H. C. LEA, *The Inquisition in the Spanish Dependencies*, The Macmillan Company, New York-London 1908, pp. 1-50 (ahora disponible en traducción italiana, *L'Inquisizione spagnola nel regno di Sicilia*, ESI, Napoli 1995, edición y prólogo de V. Sciuti Russi). Véanse, también, las reimpresiones de los estudios de V. LA MANTIA, *Origine e vicende dell'Inquisizione in Sicilia*, Sellerio, Palermo 1977 (donde han vuelto a ser publicados el amplio ensayo aparecido con el mismo título en la *Rivista storica italiana*, 3, 1886, pp. 481-598, y el volumen *L'Inquisizione in Sicilia: serie di rilasciati al braccio secolare (1487-1732). Documenti su l'abolizione dell'Inquisizione in Sicilia (1782)*, Palermo 1904) y de C. A. GARUFI, *Fatti e personaggi dell'Inquisizione in Sicilia*, Sellerio, Palermo 1978 (donde están recopilados los distintos ensayos aparecidos bajo el título «Contributo alla storia dell'Inquisizione di Sicilia nei secoli XVI e XVII» en *Archivio storico siciliano*, 1913, pp. 264-329; 1914, pp. 350-377; 1915, pp. 304-389; 1916, pp. 389-465; 1917, pp. 50-118; 1921, pp. 47-125); G. PITRÉ, *Del Santo Uffizio a Palermo e di un carcere di esso*, Società editrice del libro italiano, Roma 1940; W. MONTER, *Frontiers of Heresy. The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily*, Cambridge University Press, Cambridge 1990; F. RENDA, *La fine del giudaismo siciliano*, Sellerio, Palermo 1993; V. SCIUTI RUSSI, «Ebrei, Inquisizione, Parlamenti nella Sicilia del primo Cinquecento», en *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, edición de M. Luzzati, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 161-178; Id., «Eresia e trasgressione nella Sicilia spagnola», en *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XII-XVI*, edición de G. Zito, SEI, Torino 1995, II, pp. 245-271.
- El reciente volumen de F. RENDA, *L'Inquisizione in Sicilia* (Sellerio, Palermo 1997), anda descaminado a causa de la estrecha perspectiva historiográfica: el autor, de forma pesada y proliza, vuelve a proponer la vieja literatura y las consabidas fuentes editadas, de las que habría sido útil la relectura crítica, incluso a través de nuevos aportes historiográficos y metodológicos; además, no es de ninguna manera atendible el análisis cuantitativo de las herejías y de los procesos celebrados en la isla. Por el contrario, con el fin de periodizar las fases de la presión inquisitorial en la sociedad siciliana, son de gran utilidad los datos estadísticos que figuran en el ensayo de J. CONTRERAS, «Algunas consideraciones sobre las relaciones de causas de Sicilia y Cerdeña», en *Anuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, 37-38 (1985-1986), pp. 181-199, en lo sucesivo puestos al día por J. CONTRERAS - G. HENNINGSEN, «Forty-Four Thousand Cases of the Spanish Inquisition (1540-1700): Analysis of a Historical Data Bank», en *The Inquisition in Early Modern Europe. Studies on Source and Methods*, Edited by G. Henningsen and J. Tedeschi, Northern Illinois University Press, Dekalb, Illinois 1986, tablas 1-4, pp. 114, 117-119.
- <sup>(3)</sup> He defendido esta tesis en mi volumen *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Jovene, Napoli 1983, pp. 139-188; en este ensayo quisiera profundizarla con nuevos documentos hallados en los archivos de Madrid y de Simancas.
- <sup>(4)</sup> C. A. GARUFI, *Fatti e personaggi*, cit., pp. 206, 228.
- <sup>(5)</sup> *Relazione del tribunale del Sant'Officio della Santissima Inquisizione del Regno di Sicilia*,

anónima y que remonta a la segunda mitad del siglo XVII, en Biblioteche Riunite Civica-Ursino Recupero, Catania, Ms. Civ. A 56, f. 87r.

- <sup>(6)</sup> «Advertencias que el duque de Medinaceli dejó a D. Garcia de Toledo sobre el gobierno del reino de Secilia. De Mecina a 3 de enero de 1565», *Colección de documentos inéditos para la historia de España*, 28, p. 339. Sin embargo, a finales del siglo XVI, para multiplicar sus aforados, el Santo Oficio eligió oficiales incluso en los «casalotti» de dos viviendas, sin iglesia ni molino (BCP, Ms. 3 Qq E 70, ins. 15).
- <sup>(7)</sup> *Avvertimenti di don Scipio di Castro a Marco Antonio Colonna quando andò viceré di Sicilia*, edición de A. Saitta, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1950, p. 69. No había «mercante florentino o genovese» que no estuviera inscrito en el Santo Oficio como familiar; eran también numerosos los catalanes (BCP, loc. ult. cit.).
- <sup>(8)</sup> *Capitula Regni Siciliae*, edición de Francesco Maria Testa, Panormi 1741-1743, II, pp. 144, 213 (para las anteriores y análogas instancias de 1522 y 1535, cfr., ivi, pp. 46-47, 130).
- <sup>(9)</sup> A. CRIVELLA, *Trattato di Sicilia (1593)*, edición de A. Baviera Albanese, Sciascia, Caltanissetta 1970, p. 51 (la cursiva es nuestra).
- <sup>(10)</sup> Los inquisidores exigieron, también, que sus familiares y oficiales, «siendo facultosos», no estuvieran obligados a conceder préstamos a la Regia Corte, ni a hospedar a los ministros y soldados regios (el Consejo de Italia a Felipe II, sin fecha, AHNM, Estado, legajo 2200).
- <sup>(11)</sup> Véase la lista publicada por C. A. Garufi, *Fatti e personaggi*, cit., pp. 308-311.
- <sup>(12)</sup> AGS, Estado, leg. 1147, 184 y 186, Colonna a Felipe II, Palermo 13 de noviembre de 1577; V. La Mantia, *Origini e vicende*, cit., p. 61, refiere que dicho virrey en una carta anterior había hecho referencia a 24.000 familiares.
- <sup>(13)</sup> *Avvertimenti di don Scipio di Castro*, cit., pp. 67-69; *Los advertimientos del doctor Fortunato sobre el gobierno de Sicilia (1591)*, edición de A. Baviera Albanese, Società siciliana per la storia patria, Palermo 1976, pp. 90-94.
- <sup>(14)</sup> A. CRIVELLA, *Trattato*, cit., p. 51. Numerosos episodios se encuentran en la documentación conservada en AHNM, Estado, legajo 2200, passim.
- <sup>(15)</sup> El Consejo de Italia observó «que no se trata, ni pretende de ver las instrucciones, en que consiste el secreto de su officio» (AHNM, Estado, legajo 2200); la misma consulta refleja la pretensión de los inquisidores de poseer un matadero con el fin de eludir los límites impuestos por las pragmáticas en la matanza de los bovinos, animales necesarios para el cultivo de los campos.
- <sup>(16)</sup> C. A. GARUFI, *Fatti e personaggi*, cit., p. 208.
- <sup>(17)</sup> *Los advertimientos del doctor Fortunato*, cit., pp. 92-93.
- <sup>(18)</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio*, IV, Panormi 1773, pp. 69-73.
- <sup>(19)</sup> *El Cerimoniale de' Signori Viceré* (edición de E. Mazzaresse Fardella, Società siciliana per la storia patria, Palermo 1976, p. 100) codificaba el *Modo e forma di leggere l'editti degli inquisitori*, y registraba la ceremonia de 1592, celebrada en presencia del virrey conde de Olivares: «Il più anziano delli quali [inquisitori] hebbe loco alla destra di Sua Eccellenza et alla sinistra rimase il Pretore, l'altri dui Inquisitori andavano innanzi immediatamente di Sua Eccellenza a cui accompagnaro insino al suo teatro, e doppo essi se n'andaro a sedere nel loco dell' Archivescovo, tenendo dietro le spalle un panno di velluto, e tre cuscini d'innanzi per ingenocchiarsi non tenendo tusello né meno scabelli; alla destra e sinistra, in banchi con spallieri e panni di sopra, sederno li loro officiali; finiti l'editti vennero a pigliare Sua Eccellenza e l'accompagnorno fuor della porta della chiesa, il quale entrato in carrozza se ne ritornò

a Palazzo et essi Inquisitori cavalcorno facendo camini per la [loro] casa» (la cursiva es nuestra). En 1604 y 1606, los inquisidores (entre ellos Luis de Páramo) acompañaron al virrey duque de Feria «per insino alla porta, si licentiario, e Sua Eccellenza ordinao alla Guardia di Tedeschi che andassero con loro», como señal de respeto (ivi, pp. 41, 44).

- <sup>(20)</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, Colonna a Felipe II, Palermo, 4 de marzo de 1578.
- <sup>(21)</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae*, cit., I, Panormi 1636, p. 70, § 3.
- <sup>(22)</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, Olivares a Felipe II, Palermo, 30 de marzo de 1595. Además, «quando van a ver dende alguna ventana alguna processión o otra fiesta, se hazen poner en cima de lo alto de la ventana un dossel o cielo de cama, cerimonia que solo se ha platicado en los Virreyes, i que aun el día del edicto, con ser, como digo, su día, solo les [h]a sido admitido un paño colgado en la pared». La pragmática De *inscriptionibus* había reglamentado en 1592 la atribución de los títulos (cfr. *Pragmaticarum Regni Siciliae*, cit., II, Panormi 1637, pp. 514-522). Los inquisidores de Sicilia recibían en las cartas de la Suprema y del inquisidor general el tratamiento de «Muy Reverendos Inquisidores» (AHNM, Inquisición, libro 361, *passim*), pero en la isla exigían el título de «Ilustrísimos y Reverendísimos Inquisidores» (AHNM, Inquisición, legajo 1749, 10).
- <sup>(23)</sup> AGS, Estado, legajo 1148, 4, Colonna a Felipe II, Palermo, 6 de agosto de 1577. Entre los responsables de la sedición —a juicio del virrey *crimen lesae maiestatis in secundo capite*, merecedor de la más rigurosa justicia— había un familiar del Santo Oficio perteneciente a la noble familia Fardella, encarcelado por los jueces reales, del que los inquisidores pidieron remisión bajo pena de excomunión. Marco Antonio comunicó a los inquisidores la retención de Fardella en nombre del soberano y del inquisidor general, a quienes había referido el caso; y declaró a Felipe II «que sólo esto aprovechava, a que en delictos enormes y que merecen pena de muerte tuviesse relación dello Vuestra Magestad y el Inquisidor general».
- <sup>(24)</sup> AGS, Estado, legajo 1148, 9, «Encartamento de todo lo que ha passado entre Marco Antonio Colonna y los inquisidores don Juan de Rojas y licenciado Ahedo sobre la executoria de sus provisiones desde el día que vinieron hasta 17 de noviembre 1577».
- <sup>(25)</sup> AGS, Estado, legajo 1148, 66. Por concesión del papa Urbano II al conde Rugero, los reyes de Sicilia detentaban el privilegio de la Apostólica Legacía, por lo común denominada Monarquía de Sicilia. Esta potestad de «legado nato» del sumo pontífice confería a los soberanos (y a sus jueces delegados) una amplia jurisdicción eclesiástica, a menudo obstaculada por la Santa Sede, que puso en tela de juicio la autenticidad del privilegio.
- <sup>(26)</sup> *Capitula Regni Siciliae*, cit., II, p. 98 (es el capítulo 129 de Carlo V).
- <sup>(27)</sup> AGS, Estado, legajo 1148, 9, «Encartamento de todo lo que ...», cit. En una reunión posterior el Sacro Regio Consejo sugirió al virrey que impidiera a los inquisidores el ejercicio de la jurisdicción temporal.
- <sup>(28)</sup> AGS, Estado, legajo 1147, 184, Colonna a Felipe II, Palermo, 13 de noviembre de 1577.
- <sup>(29)</sup> Es el parágrafo 4 de la pragmática-concordia del 1580 (la cursiva es nuestra): cfr. *Pragmaticarum Regni Siciliae*, cit., I, cit., p. 70.
- <sup>(30)</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae*, cit., I, cit., pp. 69-73.
- <sup>(31)</sup> Cfr., *supra*, nt. 25.
- <sup>(32)</sup> H. C. Lea, *The Inquisition in the Spanish Dependencies*, cit., p. 28.
- <sup>(33)</sup> AHNM, Inquisición, legajo 1751, 9, Páramo y López de Varona a Quiroga, 4 de junio de 1590, del que se han extraído todas las citas del texto (la cursiva es nuestra); además, cfr., ivi, Páramo a Quiroga, 22 de junio de 1590; acerca del debate relativo a la inscripción de la

nobleza en la familia inquisitorial. C. A. Garufi utiliza otro escrito de Páramo del 18 de julio de 1590 (*Fatti e personaggi*, cit., pp. 270-279).

- <sup>(34)</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae*, cit., I, cit., p. 74. Sin embargo, se halló el modo de eludir con facilidad esta última disposición: algunos nobles renunciaron a la titularidad de los feudos a favor de los primogénitos (u otros herederos) y conservaron la administración, beneficiándose en sus contenciosos civiles y penales del anhelado fuero privilegiado. En 1598, el virrey duque de Maqueda denunciaba los impedimentos que daban los inquisidores bajo pretexto de «sus libertades», así como las familiaduras concedidas a los delinquentes después de haber cometido el delito y la renuncia de los feudos por parte de los nobles a sus hijos menores de edad con el fin de conservar el privilegio del fuero (AHNM, Estado, legajo 2200, Maqueda a Felipe III, 9 de septiembre de 1598); posteriormente, la pragmática de 1635 excluyó también a quien hubiera recurrido a tal expediente (*Pragmaticarum Regni Siciliae*, cit., III, Panormi, 1658, p. 21).
- <sup>(35)</sup> H. C. LEA, *The Inquisition in the Spanish Dependencies*, cit., p. 31.
- <sup>(36)</sup> Sobre el personaje, cfr. el reciente e importante estudio de H. Pizarro Llorente, *Don Gaspar de Quiroga (1512-1594). Un gran patrón en la corte de Felipe II*, tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 1997 (en vías de publicación).
- <sup>(37)</sup> J. H. ELLIOTT, *La España imperial, 1469-1716*, Vicens Vives, Barcelona 1965, pp. 298-299 (trad. cast. de *Imperial Spain 1469-1716*, London 1962); P. Pierson, Felipe II de España, Fondo de Cultura Económica, México D. F. 1984, pp. 135-136 (trad. cast. de *Philip II of Spain*, Thames and Hudson, London, 1975).
- <sup>(38)</sup> La cita es de Diego de Covarrubias y la he tomado de P. Fernández Albaladejo, *Fragmentos de Monarquía*, Alianza Editorial, Madrid 1992, p. 74.
- <sup>(39)</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae*, cit., I, cit., p. 73, § 15.
- <sup>(40)</sup> AHNM, Estado, legajo 2200: lo refirió el Consejo de Italia a Felipe II, Madrid, 24 de abril de 1581.
- <sup>(41)</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, *passim*. En particular, véanse los casos referidos en la consulta del Consejo de Italia del 28 de marzo de 1584, en la carta del virrey Alba de Liste del 24 de marzo de 1587, en la *Relatione del successo della scomunica fatta dalli inquisitori contra il Capitano di Palermo* [agosto de 1589], en los memoriales del tribunal de la Gran Corte del 6 y del 12 de enero de 1594, en las cartas del virrey Olivares del 17 de diciembre de 1593 y del 6 de enero de 1594. En 1594, Olivares había ordenado que aquellas causas que los jueces de la Gran Corte habían declarado de su competencia –y por ello no remitibles a los inquisidores– fueran discutidas y votadas en su presencia por el consultor y por los dos presidentes de la Gran Corte y del Concistorio (AHNM, Estado, legajo 2200, Olivares a Felipe II, Palermo, 26 de febrero de 1594).
- <sup>(42)</sup> AHNM, Estado, legajo 2200. Olivares a Felipe II, Palermo, 6 de enero de 1594.
- <sup>(43)</sup> La pragmática de reforma de las magistraturas se promulgó en 1569 y con ella Felipe II quiso dignificar la clase togada y dar un carácter piramidal a la organización judicial siciliana mediante la creación de tres presidentes perpetuos y remunerados en lo más alto de los tres nuevos tribunales, y mediante la abolición de tres grandes oficios de la corona, ámbito exclusivo de la antigua feudalidad. A los seis jueces de la Gran Corte y a los tres del Concistorio, la dignidad les fue conferida por dos años, sin sueldo a cargo del erario; sus únicos ingresos procedían de los derechos que las partes abonaban en los distintos expedientes. Al final del bienio de judicatura, los ex togados volvían a ejercer la abogacía y a tutelar los intereses económicos de las clases dominantes. Después de una vacatio de un año, al menos, podrían vol-

ver a llevar la toga durante otro bienio. Hasta el final del siglo XVIII, la doctrina jurídica filo-absolutista denunció vigorosamente el hecho de que este sistema implicaba la corrupción de los jueces-abogados, su falta de autonomía y su actitud subordinada a la nobleza. La conciencia, por parte de los jueces bienales, de quedar expuestos a la violencia de los poderosos una vez reincorporados al estado de ciudadanos particulares, les impedía el pleno ejercicio de las funciones institucionales, o sea, la defensa de la jurisdicción real y la conservación de las prerrogativas soberanas. Las aspiraciones de ascenso social de los togados y su régimen bienal menguarían de hecho los objetivos antifeudales de la reforma de Felipe II: para todo ello, véase V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, cit., pp. 69-136.

- <sup>143</sup> Acerca del grave episodio del almacenero de Terranova, que había vendido trigo adulterado que causó la muerte por envenenamiento de algunas personas, consúltase el texto más adelante.
- <sup>144</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, Olivares a Felipe II, Palermo, 27 de enero de 1595 (la cursiva es nuestra). Los inquisidores se habían atrevido a encarcelar a unos delegados y oficiales que ejecutaban las órdenes del virrey y del tribunal de la Gran Corte y, por medio de sus comisarios, habían ordenado la puesta en libertad de unos presos (ivi, Olivares a Felipe II, Palermo, 21 de abril de 1595); el virrey insistía cómo «consista su reputación en responder con insolencia y con desprecio a la justicia», pero había preferido «padecer indegnidades» más que «venir a alguna injuria de ministros de tan sacrosanto ministerio» (ivi, Palermo, 22 de junio de 1595).
- <sup>145</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, Colonna a Felipe II, Palermo, 5 de marzo de 1578. La pragmática-concordia de 1597 prohibiría recurrir a semejante expediente.
- <sup>146</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, informes del consultor Diego Escudero al virrey, Palermo, 23 de febrero y 5 de marzo de 1588.
- <sup>147</sup> En los pleitos civiles, el juicio de apelación a la sentencia de primer grado se celebraba ante otro inquisidor, asistido por los consultores letrados. Desde el punto de vista procesual, existía el inconveniente de una segunda sentencia pronunciada por un juez del mismo nivel jurisdiccional. El Parlamento de 1597 pidió, por ello, a Felipe II que ordenara el cumplimiento de su real decreto, emanado en Lisboa el 22 de noviembre de 1582 y enviado a Marco Antonio Colonna, en el que se disponía que el virrey, como supremo representante del rey, se encargara de la revisión de las sentencias en materias temporales (AHNM, Estado, legajo 2200, minuta de consulta, sin fecha).
- <sup>148</sup> AHNM, Inquisición, libro 877, f. 69r.
- <sup>149</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, Colonna a Felipe II, Palermo, 4 de marzo de 1578. Según el parecer del virrey, en el caso de que los presidentes de las tres supremas magistraturas isleñas hubieran sido llamados a desempeñar actividades jurisdiccionales, su voto habría tenido que ser decisivo y no meramente consultivo (ivi).
- <sup>150</sup> La decisión ológrafa de Felipe II se halla en una consulta del Consejo de Italia: el soberano ordenó que se invitara la Suprema a emanar una «carta acordada» en la que se pidiera a los inquisidores de Sicilia que establecieran los días y las horas en que los jueces reales debían ejercer la función de consultores de la Inquisición (AHNM, Estado, legajo 2200).
- <sup>151</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, el Consejo de Italia a Felipe II, Madrid, 24 de abril de 1581.
- <sup>152</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, minuta de la real orden. Almada, 26 de junio de 1581. ivi. La orden lleva la fecha de 23 de julio de dicho año en las *Constitutioni prammaticali del regno di Sicilia fatte sotto il felicissimo governo dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Viceré, Luogotenente et Capitano Generale il signor Marc'Antonio Colonna*, Panormi 1583, pp. 11-12. En las *Siculae Sanctiones*, II, Panormi 1751, pp. 326-328, la orden (fechada Lisboa, 27 julio

1581) atribuye a los consultores del Santo Oficio los privilegios de los oficiales asalariados, que eran más amplios, puesto que se extendían también a los hijos y a los criados.

- <sup>(54)</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, los inquisidores Temiño y Salazar y los regentes Ramondetta y Carvajal a Felipe II (en el reverso: «consultado en Almada a 26 de junio 1581»). M. Rivero Rodríguez opina que la ofensiva jurisdiccional de Colonna había reducido, ya en 1583, «a papel mojado» la pragmática-concordia del 1580 («Corte y “Poderes provinciales”: el virrey Colonna y el conflicto con los Inquisidores de Sicilia», en *Cuadernos de Historia Moderna*, 14, 1993, pp. 85-88). No comparto esta tesis basada en las quejas de los inquisidores de Sicilia –reflejadas en la correspondencia con el inquisidor general y que son claramente un testimonio de parte– y en la errónea lectura de la orden de Almada del 26 de junio de 1581, interpretada como concesión a los virreyes de un instrumento de control sobre la oficialidad regia aforada.
- <sup>(55)</sup> En efecto, ocurrió que, en un mismo delito, los nobles mandatarios quedaron absueltos por el fuero del Santo Oficio y los ejecutores condenados a muerte por el tribunal de la Gran Corte.
- <sup>(56)</sup> *Los advertimientos del doctor Fortunato*, cit., pp. 92-94 (la cursiva es nuestra).
- <sup>(57)</sup> AHNM, Estado, legajo 2200 (sin fecha, entre 1580 y 1593); y aún más, observaban los regentes, la pragmática-concordia de 1580 excluía del privilegio del fuero los delitos cometidos en el ejercicio de un oficio público.
- <sup>(58)</sup> El conde de Olivares solicitó a Felipe II que estos últimos desistieran de un conflicto de competencia y que no se entrometieran en las materias relativas a los intereses del erario soberano: AHNM, Estado, legajo 2200, Olivares a Felipe II, Palermo, 6 de diciembre de 1593. El virrey observaba que «la mira» de los inquisidores es proceder en todos los procesos de sus familiares, «en modo que todos deseen serlo».
- <sup>(59)</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, Olivares a Felipe II, Palermo, 25 de marzo de 1594.
- <sup>(60)</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, Olivares a Felipe II, Palermo, 26 de febrero de 1594.
- <sup>(61)</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, real orden del 10 de agosto de 1594.
- <sup>(62)</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, real orden del 26 de noviembre de 1594.
- <sup>(63)</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae*, cit., I, cit., p. 77.
- <sup>(64)</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, Olivares a Felipe II, Palermo, 12 de agosto de 1594; el recurso de los jurados de Mesina a Felipe II, ivi, Messina, 26 de julio de 1594. La pragmática-concordia de 1597 confirió a «las justicias seculares» la jurisdicción de estos fraudes. Con anterioridad el tribunal del Real Patrimonio había denunciado el caso de un depositario de los ingresos reales de Caltagirone que se negaba a dar el informe contable de su administración a su superior (ivi, Palermo, 1 de diciembre de 1593).
- <sup>(65)</sup> BCP, Ms. 3 Qq E 70, ins. 15.
- <sup>(66)</sup> También la pragmática de 1597, al igual que la promulgada en 1580, se denominó «concordia» porque en la elaboración del texto participaron dos representantes de la Suprema, Juan de Zúñiga y Juan de Álvarez, y dos regentes del Consejo de Italia, Bartolomeo Brugnoli y Diego Escudero. Sin embargo, el virrey conde de Olivares había preparado el terreno enviando con anterioridad a Madrid al maestro racional Giovan Battista Celestre y al procurador fiscal Alfonso de Franchis para comunicar los conflictos más graves y frecuentes que habían «muy perturbado el gobierno y quietud pública del Reyno». La pragmática de 1597 se halla en *Pragmaticarum Regni Siciliae*, cit., I, cit., pp. 74-81.
- <sup>(67)</sup> Son las consultas del 25 de marzo de 1595 y del 12 de mayo de 1596, en AHNM, Estado, legajo 2200, a las que se refieren las citas incluidas en el texto.

- <sup>168</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, voto singular del regente Brugnoli. Madrid, 24 de marzo de 1594. Bartolomeo Brugnoli, conseguido el doctorado en la universidad de Pavía, había sido nombrado regente para Milán en 1591; fue ascendido a la presidencia del Senado en 1597. Su actitud en relación a los problemas causados por los inquisidores en Sicilia parece más radical de la expresada por el regente siciliano Escudero, con quien compartió la tesis de la completa exclusión de la nobleza feudal del fuero inquisitorial.
- <sup>169</sup> La pragmática reflejará con las mismas palabras la voluntad del soberano: «No procedan los inquisidores por censuras contra las personas de los virreyes sin que yo lo entienda, ni el inquisidor general les pueda dar, ni dé orden ni licencia para ello sin consulta y aprobación mía, pues según la gravedad y peligro del negocio de que se tratará, mandaré lo que conveniga y fuere servido» (*Pragmaticarum Regni Siciliae*, cit., I, cit., p.79).
- <sup>170</sup> «No han de gozar los familiares del privilegio del Santo Oficio sino desde el día que fueren admitidos», precisó Felipe II al margen de la consulta.
- <sup>171</sup> El brazo nobiliar pretendió que la aprobación de los donativos estuviera condicionada al hecho de que Felipe II respetara los capitula del Reino, y en particular el capítulo 49 del rey Juan que prohibía el procedimiento *ex abrupto*. El virrey conde de Alva de Liste, según escribió a la corte el consultor Diego Escudero, «con razones y destreza» intentó persuadir al jefe del brazo militar Girolamo Branciforte, duque de San Giovanni, que no era ni conveniente ni admisible que un «servicio» estuviera subordinado a «condición suspensiva», como si el Parlamento quisiese «contractar con su Magestad y obligarle a que hiziesse lo que ellos querían». Y puesto que el donativo había sido aprobado «libremente y sin condición» por los otros dos brazos del Parlamento, el virrey convocó el Sacro Regio Consejo que declaró suficientes estos consensos y autorizó la recaudación de los donativos, poniendo de manifiesto «quan grande y notable ynconveniente sería hazer semeyante introducción de que en cada Parlamento se pusiessen y pidiessen condiciones extraordinarias y ymperitinentes» (AHNM, Estado, legajo 2267, Escudero al Consejo de Italia, Palermo, 12 de julio de 1591).
- <sup>172</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae*, cit., I, cit., p. 78.
- <sup>173</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, Maqueda a Felipe II, Palermo, 18 de mayo de 1598.
- <sup>174</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, Olivares a Felipe II, Palermo, 10 de septiembre de 1593. El virrey denunciaba que los inquisidores, en todas las pesquisas judiciales llevadas a cabo por la Gran Corte por lo que concernía a los reatos excluidos del fuero privilegiado, cometían estas fechorías, encaminadas a sobornar a los testigos y a recoger falsos testimonios en defensa. Sobre el problema, cfr. la consulta del Consejo de Italia a Felipe II, Madrid, 12 de febrero de 1596 (ivi).
- <sup>175</sup> AHNM, Estado, legajo 2200: véanse la *Memoria de las cartas que a escrito el conde de Olivares a Su Magestad* (en que viene resumida una carta del 9 de octubre de 1592) y las cartas del virrey Olivares fechadas 8 de octubre de 1593, 26 de febrero, 25 de marzo, 12 de mayo y 30 de diciembre de 1594, 27 de enero, 30 de marzo y 21 de abril de 1595; para todo lo relativo el virrey duque de Maqueda, véase la carta del 18 de mayo de 1595.
- <sup>176</sup> AHNM, Estado, legajo 2200. Haedo a Felipe II, Palermo, 2 de enero de 1594. Si el inquisidor más antiguo y el presidente de la Gran Corte no hubieran llegado a un acuerdo, la competencia debía ser decidida por un «tercero», que por algunas causas habría podido ser, según la propuesta de Haedo, un ministro no siciliano como, por ejemplo, el presidente de la Sumaria de Nápoles, «que siempre suele ser persona grave de letras». Parece evidente, en esta última propuesta el objetivo de evitar los condicionamientos por parte de feudatarios o mercaderes muy potentes.



- <sup>177)</sup> Solamente con la pragmática de 1635, en la lista de materias excluidas del *privilegium fori* se añadieron el amplio e importante sector de la producción, del comercio y de la exportación de cereales, así como el de la matanza de bovinos, limitada y controlada por la importancia que tenían en el cultivo de la tierra. Además, se incluyeron entre los casos reservados a los jueces regios la tonsura de la moneda, la fabricación y la puesta en circulación de moneda falsa, la resistencia hacia oficiales y ministros regios con armas u otras formas de oposición violenta, el intento de homicidio y de herimiento, el falso testimonio ante los tribunales regios (*Pragmaticarum Regni Siciliae*, cit., III, cit., pp. 11-27).
- <sup>178)</sup> J. MARTÍNEZ MILLÁN, «Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio: la “Junta Magna” (1696)», *Hispania Sacra*, 37 (1985), pp. 205-259. La importante consulta de 1696 ha sido publicada, en un apéndice, en las pp. 227-259.
- <sup>179)</sup> Esta subordinación del santo tribunal a los virreyes se alcanzó por fin durante el reino Carlos de Borbón en 1746, cuando fue encomendada al virrey la tarea de resolver —con el parecer de la Junta de los Presidentes y del Consultor— los conflictos jurisdiccionales con las magistraturas ordinarias en materia de fuero privilegiado inquisitorial: la orden real está publicada en *Siculae Sanctiones*, to. II, Panormi 1751, pp. 353-355.
- <sup>180)</sup> AHNM, Estado, legajo 2200, carta de Felipe II al inquisidor general, Bruxelles, 23 de marzo de 1558.